

Un año de luces y sombras

La exigencia del PP de mantener Garoña en funcionamiento para sellar un Pacto por la Energía y la postura de diálogo del Gobierno marcan el aniversario del anuncio del cierre

A.C. / Garoña

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, manifestó el miércoles tras su primera reunión negociadora del Pacto Nacional de la Energía con el coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que «Garoña pertenece al pasado» y que el documento que se pretende suscribir para determinar la estrategia energética de los próximos 25 años es «futuro». Ante esta frase y cuando se cumple un año desde que el Ministerio de Industria emitiera la Orden de cese definitivo de la explotación de la central y lo situara en el 6 de julio de 2013, el comité de empresa de Nuclenor, representante de quienes más perderán con esta decisión, insiste en que «Garoña no es pasado, es presente y, sobre todo, futuro».

Tras un año en que se ha vivido un interminable cruce de valoraciones, opiniones, reproches y críticas sobre esta controvertida decisión del Gobierno de

Rodríguez Zapatero, los defensores de la continuidad de la planta ven 'brotes verdes' y entre la plantilla se contempla el futuro con mayor optimismo. Por un lado, el Partido Popular, como anunció su líder Mariano Rajoy el pasado 6 de octubre en el Valle de Tobalina, mantiene que rectificar sobre Garoña es una condición para sellar el Pacto de Estado de Energía. Por otro, el ministro de Industria insiste en que «no habrá líneas rojas» y en que está dispuesto a dialogar sobre la energía nuclear.

Ayer, el rotativo de tirada nacional Cinco Días afirmaba, que la Secretaría de Estado de Energía dispone de un informe que justifica la continuidad de la central nuclear más allá de 2013. Según este mismo periódico, «fuentes cercanas al Ejecutivo» esgrimían que el informe se ha redactado ante el temor a que las eléctricas pudieran ganar el recurso contencioso administrativo presentado en abril ante la Audiencia Nacional, mientras que otras fuentes aludían a que es fruto del interés por utilizar Garoña como moneda de cambio para llegar a un pacto con el PP.

Ante los tribunales

En cualquier caso, los recursos ante los tribunales de Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, siguen su curso junto a los de numerosas instituciones y colectivos, como la Junta de Castilla y León, la AMAC o el comité de empresa también contrarios a la orden de cierre dictada hace un año. Entonces, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, decía que era «responsable e irreversible», pero el panorama económico ha variado sustancialmente y el cierre llevará a las listas del paro a más de mil trabajadores. La central del Valle de Tobalina dio empleo directo en 2009 a 349 trabajadores de Nuclenor y a 601 trabajadores de empresas subcontratadas.

Para paliar su pérdida, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, presentó el pasado mes de noviembre el Plan Garoña que anuncia sobre el papel un total de 950 millones de euros de inversión en las comarcas de Merindades, Miranda de Ebro y Bureba, además de la ejecución de infraestructuras ya planificadas por valor de otros 2.300 millones de euros. Pasados los meses, todo sigue todavía en el papel y solo los 28,8 millones -22,9 millones en préstamos a interés cero y 5,9 millones en subvenciones- del Plan de Reindustrialización de la Zona de Influencia de Santa María de Garoña son una realidad.

Durante este año pasado, diversos representantes del PP han esgrimido en más de una ocasión la frase de que el «mejor plan para Garoña es su continuidad». El alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, defiende también el mantenimiento de la planta en condiciones de seguridad, pero insiste en que «el Plan Garoña debe seguir adelante, con o sin cierre».



La sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña en una parada de recarga.

DB